



Wladimir Astudillo
Seremi de Minería Tarapacá

En momentos en que el mundo transita por tensiones internacionales, marcadas por el cuestionable rol que pretende adoptar una de las grandes potencias del globo, Chile se encuentra ante una oportunidad histórica que debe ser abordada con responsabilidad y visión de futuro. Nuestro país está llamado a ocupar una posición de liderazgo en un inminente nuevo ciclo económico internacional, cuyo único punto de consenso, parece ser la necesidad de avanzar hacia la sostenibilidad y la transición energética. La reciente COP28 reunió a casi 200 países que acordaron avanzar decididamente en el tránsito de combustibles fósiles hacia energías renovables. La Unión Europea, en tanto, profundiza su Pacto Verde como hoja de ruta normativa y financiera para alcanzar sus metas climáticas y productivas al 2030. En

La nueva oportunidad de Tarapacá: minería, desarrollo y futuro

paralelo, Estados Unidos ha destinado más de 303 mil millones de dólares en el último año al impulso de tecnologías limpias, mientras la inversión global en transición energética alcanzó los 2,1 billones de dólares en 2024. Ante este escenario global en plena transformación, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) proyecta que la demanda por minerales esenciales para la transición energética, como el litio y el cobre, se cuadruplicará de aquí al año 2030. Es precisamente en este punto donde Chile y su norte, se posiciona como un actor clave y adquiere un rol estratégico, gracias a la calidad de sus procesos mineros, la infraestructura productiva disponible y la solidez de su Estado.

Por estas razones nuestro país necesita dotarse de los resguardos, instrumentos y capacidades necesarias para afrontar los desafíos de esta nueva etapa. Consciente de esto, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha impulsado políticas públicas orientadas a fortalecer nuestra capacidad de inserción en el núcleo de la producción global. Son políticas que buscan robustecer la estructura del Estado para fomentar una mayor y mejor participación en los procesos productivos estratégicos, por ejemplo, agilizando la tramitación de permisos sin comprometer los estándares de protección ambiental, y a la vez aprovechar ese impulso y traducirlo en mayores y mejores garantías sociales, ampliando el acceso y la calidad de los servicios que el Estado entrega a las y los ciudadanos. La Estrategia Nacional del Litio representa con claridad esa doble vocación: desarrollo productivo y justicia social.

En mi labor como Seremi, he tenido la responsabilidad de liderar su implementación a nivel regional, con la convicción de que el verdadero desarrollo de Chile pasa por gestionar de manera eficiente sus recursos más valiosos. El litio no es un mineral cualquiera: sin él, la transición energética global enfrenta un riesgo real y serio. Tarapacá debe prepararse, tenemos el deber de conducir el crecimiento minero de nuestra región para traducirlo en más oportunidades para nuestras familias.

En este camino de implementar la Estrategia, al conversar con trabajadores, con vecinos y vecinas, o al compartir algunas palabras en actividades públicas, suelo recordar dos verdades, una que sabemos y otra que intuimos. La que sabemos es que, al hablar de minería, hablamos del brazo productivo más fuerte de nuestro país. La que intuimos es que debemos aprender a utilizar ese brazo de manera hábil, con más inteligencia, visión de futuro y responsabilidad.

Nos puede gustar más o menos, pero hoy minería y Estado no pueden entenderse de manera separada; deben dialogar permanentemente, construir alianzas, alcanzar acuerdos e impulsar innovaciones conjuntas, como lo ha hecho CODELCO y el sector privado.

Gracias a esta visión, hoy las municipalidades y los gobiernos regionales cuentan con más recursos, producto de otra herramienta importantísima implementada por este gobierno: el royalty minero, mecanismo que redefine de manera profunda la relación entre la minería y los territorios. Para dimensionar su impacto, un dato concreto: la región de Tarapacá hoy cuenta con más de 13.000 millones de pesos adicionales, es decir recursos que

hasta hace poco simplemente no existían.

Entonces, ya no hablamos solamente de una riqueza que se genera y no vuelve, sino de una riqueza que retorna a los territorios. Estos nuevos recursos provenientes del royalty, 1.350 millones dólares, permitirán fortalecer los servicios públicos, mejorar la infraestructura urbana y rural, y elevar la calidad de vida en nuestras ciudades y pueblos. En Tarapacá, este flujo de recursos abre la posibilidad concreta de materializar proyectos largamente anhelados en ámbitos tan fundamentales como la seguridad, la salud, la educación, el transporte y la vivienda.

Una mirada de futuro es una oportunidad presente porque es la antesala de los desafíos de mediano y largo plazo que ya comienzan a perfilarse en nuestra región. Tarapacá se encuentra en el umbral de un nuevo ciclo de expansión minera, impulsado por proyectos que, en la próxima década, requerirán la incorporación de, aproximadamente, 20.000 trabajadores y trabajadoras en distintos niveles de especialización.

Preparar a Tarapacá para este escenario implica asumir una tarea regional urgente: fortalecer la formación técnica y profesional, promover la inclusión de mujeres y jóvenes en la industria, coordinar alianzas público-privadas y anticipar las nuevas demandas sociales y productivas que empiezan a emerger. La magnitud de los desafíos que enfrentamos (económicos, sociales y territoriales) exige comprender en profundidad el vínculo con la minería, pero también gestionar con responsabilidad lo que nuestra región aporta y demanda en este ámbito estratégico.